

El rebrote de Lleida: Gestión e ideología

ANTONIO SANTAMARÍA

Periodista y ensayista sobre el nacionalismo catalán

Los rebrotes del Covid-19 en Lleida y Hospitalet han generado una intensa polémica tanto desde el punto de vista de la gestión sociosanitaria como de la acción política de la Generalitat. Durante toda la pandemia el Ejecutivo catalán no cesó de repetir que con una Cataluña independiente se habría gestionado mucho mejor la crisis y habría habido menos muertos; incluso, se llegó a culpar a Madrid de infectar al país.

En consonancia con esta línea argumental se calificó el estado de alarma de «155 sanitario» y se reclamó insistentemente el retorno de las competencias en esta materia. Una afirmación inexacta pues éstas no se intervinieron en ningún momento y en cierto modo se ampliaron al otorgar a la Administración autonómica la facultad de actuar en la sanidad privada y la industria farmacéutica. Esta estrategia de confrontación con el Estado explica la postura de Junts per Catalunya y la CUP de votar en contra de los estados de alarma, como también hizo en algunas ocasiones ERC sometida a la intensa presión de estas formaciones.

Los repuntes del coronavirus se han producido cuando ya se había levantado el estado de alarma y no podía argüirse que las competencias autonómicas estaban intervenidas por el Gobierno central. Ello no fue óbice para intentar culpar a Madrid con el argumento de que el foco de Lleida había sido provocado por los temporeros que cada año trabajan en la recogida de la fruta y que el Gobierno central no había controlado adecuadamente. Una tesis que, más allá de cierto resabio xenófobo, ignora que también en materia laboral la Generalitat tiene competencias plenas.

La situación de los temporeros ha evidenciado las terribles condiciones a que están sometidos estos trabajadores en su mayor parte inmigrantes, muchos de ellos irregulares. Especialmente, cuando esta migración se reproduce cada año y la Administración autonómica no previó nada para darles un alojamiento digno y evitar eventuales contagios.

El aluvión de críticas a la pésima gestión de la Generalitat en el repunte de Lleida y los seis municipios de la comarca del Segrià, que ya venía preludiado por la elevada mortalidad en las residencias de ancianos, motivó que el Gobierno autonómico intenta-

se demostrar que estaba tomando medidas radicales para contener la pandemia. Así, anunció el uso obligatorio de mascarillas, incluso al aire libre y cuando se pudiera mantener la distancia de seguridad, que carece de aval científico pero que ha sido imitado por numerosas comunidades autónomas. En esta línea se inscribe el primer anuncio de confinamiento total del Segrià mediante una resolución, calificada de «chapuza jurídica», que fue anulada por el Juzgado de guardia de Lleida a instancias de la Fiscalía.

Esta primera resolución contemplaba un confinamiento domiciliario que afecta a un derecho fundamental y que solo puede adoptarse con el estado de alarma, competencia del Gobierno central. Además, carecía de fecha límite y no concretaba las condiciones en que esta normativa debía cumplirse.

La anulación de esta resolución desencadenó la airada reacción del presidente, Quim Torra, con su habitual retórica de acusaciones a la justicia y al Ejecutivo español, que en este caso ponía en peligro la vida y la salud de la población afectada. Sin embargo, la actitud de la ciudadanía de Lleida no respondió a las expectativas de Torra. Tampoco el Gobierno central quiso entrar al trapo apuntando que la normativa permite a la Generalitat tomar medidas efectivas contra el rebrote y recomendándole, como hizo la vicepresidenta Carmen Calvo, que presentase un recurso contra la

decisión judicial. Por su parte, el ministro Salvador Illa, socialista catalán, no apreció conflictos de competencias en el decreto ley con el que la Generalitat quiso enmendar la «chapuza jurídica».

La manifiesta incompetencia con que la Generalitat está gestionando la crisis se ha visto agravada al saberse que la consejera de Sanidad, Alba Vergés (ERC), rechazó la ayuda logística del Gobierno español cuando se produjeron los primeros síntomas del rebrote aduciendo que la situación estaba controlada. Además, desde hace un mes está vacante el cargo de secretario de la Agencia de Salud Pública, cuya misión es precisamente velar por las directrices y prioridades en esta materia. Una circunstancia que motivó el vibrante artículo 'El país moribundo', del influyente analista Antoni Puigverd en 'La Vanguardia' (8 de julio) donde denunciaba la irresponsabilidad y la incompetencia de la Generalitat.

Hasta ahora el potente aparato mediático del Ejecutivo catalán y su recurrente recurso a culpar a Madrid de todos los males del país habían funcionado con notable éxito, al menos entre la ciudadanía independentista. La disonancia entre la retórica secesionista, teñida de supremacismo, y la cruda realidad de la incompetente gestión de la pandemia está haciendo mella incluso en estos sectores. La estrategia de utilizar el Covid-19 para atizar la propaganda independentista parece, pues, condenada al fracaso.

ANTÓN

Peligro: 'REBROTOS'



CARTAS AL DIRECTOR

No es el catolicismo

En una acertada carta al director acerca de nuestra incapacidad de controlar el gasto público y nuestra dependencia de la generosidad de la Unión Europea, se desliza una desafortunada insinuación de que la culpa es de la moral católica. Aparte del hecho de que, por más que reviso la doctrina social de la Iglesia no encuentro nada que incite al abandono de las responsabilidades individuales, el ejemplo que se nos propone, Holanda, no parece el más adecuado en plena conmemoración del 25 aniversario de la matanza de Srebrenica. Esa masacre fue posible gracias a la pasividad de los 'casco azules' holandeses, que solo en otro ejercicio simétrico de interesada demagogia podríamos atribuir al individualismo de la moral protestante.

Esta inoportunidad podría haberse evitado eligiendo otro país alineado con las tesis holandesas: Austria, por ejemplo. Pero claro: Austria es un país católico.

RAFAEL FERRER

Países muy bajos y miopes

Pocos países en el mundo necesitan como la 'exHolanda' una gran y sólida cooperación con otros. De ahí que figurara entre los seis Estados fundadores de la Unión Europea. Sus 17 millones de habitantes en sólo 41.000 kilómetros cuadrados, una de las mayores densidades del mundo, le obligan a importar gran cantidad de alimentos. Ese exiguo territorio, en gran parte a nivel o bajo el nivel del mar, le hace muy vulnerable, como ha demostrado la historia, en una guerra u otro suceso. Una situación tal sólo le permitiría sobrevivir con la ayuda exterior.

Sin embargo, recibiendo tantos beneficios de la Unión Europea, Países Bajos no ha tenido empacho en convertirse en un paraíso fiscal que empobrece a otros países de la Unión, ofreciendo ventajas indebidas a terceros países, contra el artículo 116 de la UE, que hoy está en trámites de aplicárselo en su contra.

No contento con ello y a pesar de su alto nivel de vida, este país se opone como nadie en la UE a la

ayuda humanitaria a los países más afectados por el Covid-19. Monumental muestra de avaricia, 'justificada' por su fuerte mentalidad racista, tantas veces descarada hacia los países del Sur; en especial hacia España, a pesar de que su independencia data nada menos que del 26 de julio de 1581 y fue reconocida el 30 de enero de 1648. Esa baja de miras, esa miopía, casi ceguera respecto a sus propios intereses a corto plazo, puede resultar fatal a medio o largo plazo para sus necesidades vitales de subsistencia.

MARTÍN SAGRERA
CAPDEVILA

Feijóo y Urkullu

Tanto Feijóo como Urkullu volvieron a ser elegidos después de que durante los últimos meses habían mantenido una actitud de lealtad discrepante hacia el Gobierno de España, al menos durante los meses de confinamiento. Su tono ha sido moderado y han hecho gala de la responsabilidad que ostentaban. Los electores no han descuidado el hecho de que actitudes como estas son las que, al final, acaban primando entre la mayoría de los ciudadanos. Eso, sumado al valor de la experiencia en la gestión y al deseo de estabilidad en estos momentos tan complejos, ha hecho que los presidentes autonómicos de Galicia y País Vasco hayan vuelto a ser elegidos y valorados al alza.

JUAN GARCÍA

El esfuerzo de Cáritas

Ante el incremento alarmante de la demanda de ayuda, se percibe un notable esfuerzo de generosidad por parte de la comunidad cristiana y de la sociedad española. Las donaciones en este tiempo, los cuatro meses de pandemia, se han multiplicado casi por tres. La inmediatez con la que Cáritas está dando respuesta a las necesidades se entiende desde una trayectoria que la avala. En 2019 destinó 337 millones en el conjunto de las Cáritas diocesanas para acompañar a un total de 2,3 millones de personas. Un esfuerzo y una generosidad que redundan en beneficio de todos.

PEDRO GARCÍA